

La asistencia militar de Estados Unidos en América Latina: permanencias, discontinuidades e intereses

*Carlos Barrachina Lisón
Universidad de Quintana Roo, México*

Resumen

En este ensayo se presentan las líneas básicas sobre las que ha pivotado la política estadounidense en cuestión de asistencia militar a la región latinoamericana desde la década de los ochenta a la fecha, con el objetivo de tratar de entender las principales permanencias, discontinuidades e intereses que han movido al gobierno norteamericano en temas de seguridad en relación a la región. En este trabajo se muestra cómo el interés de los Estados Unidos fluctúa a lo largo del tiempo, y cómo las políticas de asistencia militar responden a estos cambios. En contra de lo esperado en los Estados Unidos, el efecto de estas discontinuidades, y de esos intereses cambiantes, han provocado desconfianza y resentimientos en los receptores de esta asistencia.

Palabras Clave: Estados Unidos, América Latina, Asistencia Militar, Seguridad Hemisférica, Relaciones Internacionales.

Abstract

This essay introduces U.S military assistant policies in Latin America (1980-2004). The main objective is to understand the U.S. interests, continuities and changes, in relation to Latin-American security issues. This article shows how U.S interest changes over the years, and also how the military assistance policies follow them. The effects of these circumstances, against the will of U.S. government, are mistrust and resentments in Latin-American region.

Keywords: United States, Latin America, Military Assistance, Hemispheric Security, International Relations.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se explica la lógica de la asistencia militar estadounidense en América Latina, señalándose continuidades y discontinuidades desde 1980 hasta la fecha. Los inicios de esta política a escala mundial tienen que ver con la creación de la OTAN, que motivó a Truman proponer en 1949 al Congreso de su país políticas regulares de asistencia militar a países aliados.

La defensa de los intereses –cambiantes– de Estados Unidos se encuentra en la base de esta política: la lógica de la guerra fría primero, y más tarde el apoyo a diferentes causas. En el caso de América Latina desde 1989 hasta el 2002 estos se concretan especialmente en el combate al narcotráfico, como interés realista, y en menor medida en la democratización del sector defensa como interés idealista. A partir de 2002 el interés se centra en la lucha contra el terrorismo, y sus derivados, entre los que se sigue identificando la actividad de los que ahora se señalan como narcoterroristas.

Para entender este tipo de asistencia es útil hacer un poco de historia y explicar los orígenes de los principales programas que han perdurado hasta hoy día. En octubre de 1949 se impulsa la *Mutual Defense Assistance Act*, con el objeto de apoyar a aliados que no cuenten con suficiente capacidad económica para enfrentar “la amenaza soviética”, en zonas consideradas vitales para la propia seguridad de Estados Unidos. Originalmente las ayudas del *Military Assistance Program* (MAP) son de tres tipos: materiales y maquinaria para permitir incrementar la producción de bienes militares; transferencia directa de equipos militares; y ayuda en la producción, uso de los equipos y entrenamiento de personal.

Una de las características principales de estos programas es que tienen costos económicos para el país receptor, lo que evidencia que Estados Unidos comparte los costos de mantenimiento de la guerra fría con sus aliados¹. A pesar de ello, a finales de los sesenta se considera en el Pentágono que el gasto asumido por el conflicto es demasiado elevado, por lo que

¹ El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa competirán por el liderazgo de estos programas a lo largo de las diferentes administraciones. Hoy en día, se recuerda frecuentemente, por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, lo inconveniente que es para la democracia de muchos países el que los militares estadounidenses gestionen una buena parte de este gran poder económico. A partir de 1953 Estados Unidos amplía sus programas a préstamos para que los aliados puedan pagar los equipos y la asistencia recibida, y en 1963 flexibiliza más sus programas incluyendo, además de préstamos, dinero a fondo perdido y alquileres o intercambios de material.

en 1967 se impulsa un nuevo programa para gestionar las ventas. Los objetivos declarados del *Foreign Military Sales Program* (FMSP) serán: promover la fortaleza defensiva de los aliados y el concepto de logística cooperativa, y compensar el gasto que comporta tener a militares estadounidenses en el extranjero².

Además de la venta de equipos y de la dependencia tecnológica que de ello se deriva, los programas más rentables que los estadounidenses promueven para consolidar la cooperación son los de entrenamiento militar de extranjeros. En 1976 Estados Unidos había entrenado más de 450.000 militares de setenta países del mundo, con una media anual de 17.800 estudiantes, y 2.000 cursos ofrecidos por las diferentes ramas de los ejércitos estadounidenses³. El Pentágono consideraba que estos cursos eran muy positivos por sus efectos políticos; en primer lugar eran bien recibidos por los militares extranjeros, y en segundo, permitían que tuvieran un conocimiento de primera mano de la sociedad estadounidense, y que se estrechasen lazos de cooperación y comprensión profesional⁴. Por estas razones, estos programas se han seguido impulsando hasta la fecha, como se verá con detalle para el caso latinoamericano más adelante.

En este artículo se tratará de mostrar, a través del análisis de fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos, cómo estas políticas se han ido desarrollando desde la década de los ochenta en la región. A pesar de la rigurosidad de los datos que se presentan, hay que prevenir al lector sobre la circunstancia que estos no reflejan en su totalidad la asistencia estadounidense. Como se aprecia en el siguiente apartado, es muy difícil seguir el

Esta política, sin embargo, será discutida en 1967 por el Departamento de Defensa (DoD), al identificarse que entre 1957 y 1961 se pierden cerca de cinco billones de dólares de las reservas estadounidenses, y que en el período 1962-1966 las ventas únicamente compensan el 41% de los gastos realizados (DoD, 1967).

² Las normas éticas básicas de conducta que se establecen son: no vender un equipamiento a quien no lo pueda comprar, no vender nada que no necesiten las fuerzas armadas del receptor, y no recomendarle a ningún país extranjero comprar algo que puedan conseguir más barato o en mejores condiciones en otro sitio (DoD, 1967). Para la adquisición de los equipos se recomienda que se utilicen los fondos del MAP, financiando ventas bajo crédito. Las armas vendidas se dedicarán a tareas específicas, para “evitar” la carrera armamentística, y generarán dependencia tecnológica, considerándose en algunos casos la coproducción, o el traspaso de licencias para producción local. En relación a la política de costos, se confirmará la idea de que se mantenga la política de costos, pero sin perder dinero, lo que implicará que el comprador pagará el costo básico, más una parte de I+D, y servicios asociados como el embalado, el transporte, o los intereses de los créditos solicitados (DoD, 1967).

³ Lefever, 1976.

⁴ Lefever, 1976.

rastros de esta en su conjunto. A pesar de ello, con los datos que se aportan se pueden establecer pautas, y conclusiones, sobre las líneas de cambio y continuidad de las políticas de asistencia militar del gobierno de los Estados Unidos hacia la región latinoamericana.

2. DIFICULTADES PARA MEDIR LA ASISTENCIA MILITAR NORTEAMERICANA EN AMÉRICA LATINA

Averiguar la extensión total de la asistencia estadounidense es tarea compleja. La gran fragmentación de programas y la diversidad de agencias y responsables que participan en el proceso dificultan enormemente la recolección de datos. Esta circunstancia se complica en América Latina a partir de los noventa con la guerra contra las drogas, los nuevos programas de asistencia que se crean y la gestión de buena parte de estos recursos por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos que guarda una cuidada discreción sobre la información que transmite, y que se ha convertido en un actor político fundamental en la región. Apoyados por la Washington Office on Latin America (WOLA), el Latin America Working Group Education Found y el Center for International Policy son los analistas que más han contribuido a desentrañar esta complejidad a través de sus estudios⁵.

En las tablas números 1 y 2 se sintetizan, siguiendo la clasificación realizada por estos autores, los principales programas que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa coordinan en América Latina.

⁵ Han reclamado al Congreso estadounidense que se pueda acceder a toda la ayuda militar a través de un solo documento que incluya ayuda militar, antinarcóticos, entrenamiento, asistencia humanitaria, apoyo a los derechos humanos, etc. Ello evitaría problemas: “la irregularidad de los informes y la fragmentación de la ayuda hacen casi imposible tener una visión de conjunto de las actuales relaciones de Estados Unidos con América Latina; con la consecuencia de que la transferencia de armas y de técnicas peligrosas estén pasando prácticamente sin supervisión ni control del Congreso, los legisladores y el público” (Isacson *et al.*, 2004b).

TABLA I
Programas de asistencia coordinados por el Departamento de Estado

Programas	Descripción
Ventas Militares Extranjeras (FMS)	Venta directa de gobierno a gobierno. El Departamento de Defensa de Estados Unidos hace de intermediario con los fabricantes a menudo suministrando mantenimiento y entrenamiento.
Ventas Comerciales Directas (DCS)	El Departamento de Estado debe otorgar una licencia para que los gobiernos extranjeros compren a las compañías estadounidenses.
Financiación Militar Extranjera (FMF)	Son becas o préstamos para pagar el FMS. En la actualidad está inactivo el instrumento utilizado para la ayuda militar en Centroamérica.
Fondos de Discreción Presidencial	Para emergencias imprevistas. Narcotráfico incluido.
Artículos Excedentes de Defensa (EDA)	Artículos de segunda mano valorados gratis o con grandes descuentos.
Educación Militar Internacional (IMET)	Financia la mayoría de los cursos ofrecidos por Estados Unidos.
Control Internacional Narcóticos (INC)	Paga amplia gama de actividades. Sustitución de cultivos, programas de fumigación, reforma judicial. Transferencias de armas y entrenamientos de fuerzas militares y policiales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Isacson, *et al.* 2004b.

La lucha contra las drogas, identificada como asunto de seguridad nacional por Nixon en 1968, no se incorporó en la agenda militar hasta el año 1989 –en el que Bush declara que el Departamento de Defensa liderará la lucha contra las drogas en el exterior de Estados Unidos⁶–, dotándolo con 2.2 billones de dólares para los siguientes cinco años. Clinton retomó este esfuerzo aprobando en 1998 la *Western Hemisphere Drug Elimination Act* que recomienda que el Departamento de Defensa convierta la lucha contra las drogas en su primera prioridad en el hemisferio.

⁶ La lucha contra las drogas se militarizará fuera de las fronteras de Estados Unidos. Esta nación considera que en zonas como América Latina, las instituciones más confiables para la lucha contra el narcotráfico son las instituciones militares. Para facilitar el contacto entre profesionales, dotar de asistencia militar a los extranjeros, y defender adecuadamente un interés claro estadounidense, se incorpora este objetivo dentro del espectro de misiones de los ejércitos estadounidenses. En el interior de Estados Unidos los militares no tienen competencias para estos asuntos, siendo otras agencias las responsables de su control.

El documento del Latin America and Caribbean Peacebuilding Program (LA/C) “Still pulling Strings” complementa el esfuerzo de Isacson y Olson para clarificar la complicada red de programas de financiación del gobierno de Estados Unidos para el tema de la lucha contra el narcotráfico. Para el LA/C⁷ esta ayuda no solo no es positiva, sino que en el fondo es una máscara para ocultar otro tipo de actividades militares en la zona que lo único que persigue es aumentar la autonomía militar en la región, alimentar la carrera armamentista y consolidar la influencia de los militares estadounidenses en la región⁸.

TABLA 2
Programas de asistencia coordinados por el departamento de defensa

Programas	Descripción
Sección 1004 (Antinarcóticos)	Desde 1989 el Pentágono es la “agencia directiz” para la interdicción de drogas fuera de Estados Unidos. Puede entrenar a militares y policías extranjeros, transferir equipos para este fin.
Para países específicos	Se autoriza transferir armas y entrenamiento a programas específicos.
Instituciones de capacitación (cursos en español)	Diferentes escuelas: La antigua <i>Escuela de las Américas</i> (SOA) situada en Fort Benning, Georgia, que en la actualidad recibe el nombre de <i>Western Hemispheric Institute for Security Cooperation</i> (WHISC). La <i>Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas</i> (IAAFA) situada en la Base aérea de Lackland. La <i>Escuela de Entrenamiento técnico e instrucción de naves pequeñas</i> (NAVSCIATTS) que se encontraba en la Base Naval de Rodman en Panamá, y que actualmente se divide en dos localizaciones: Camp Lejeune Marine Corps Base, North Carolina, y Gulfport, Mississippi. Finalmente el <i>Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa</i> (CHDS) que se encuentra en Washington, DC.
Despliegues de entrenamiento	Diferentes Ejercicios: <i>Equipos de Entrenamiento Militar (MTT)</i> : grupos pequeños de instructores que viajan a enseñar un curso; <i>Ejercicios Conjuntos</i> , organizados por el Comando Sur (operacionales, multinacionales, asistencia humanitaria, de ingeniería, construcción de infraestructuras). <i>Entrenamiento de Intercambio Conjunto y Combinado</i> (JCET) Entrenamiento de Fuerzas Especiales normalmente para operaciones antinarcóticos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Isacson, *et al.* 2004b.

⁷ LA/C, 1999.

⁸ El Comando Sur (Southcom) es el instrumento militar que Estados Unidos utiliza preferentemente para aproximarse a los temas de seguridad y defensa en la región. La

En el año 2000 el presidente Clinton va más allá en la lucha contra el narcotráfico y aprueba el Plan Colombia. Este consiste en un paquete de 1.3 billones de dólares de apoyo a Colombia y sus vecinos para los siguientes dos años. El 65% (860 millones) se destina directamente a Colombia, y el restante 35% entre Perú, Bolivia, Ecuador y las agencias norteamericanas de apoyo regional⁹.

Estos 860 millones de dólares de ayuda, según el Center for International Policy's¹⁰, se reparten de la siguiente forma: para asistencia militar 519.2; para asistencia policial 123.1; para desarrollo alternativo 68.5, para ayuda a

lógica que prevalece en las relaciones de los oficiales del Comando Sur con la región, es como señala Diamint (2001), siguiendo la estela marcada por LA/C, la militar-militar. Los estadounidenses tienden a realizar operaciones bilaterales con las fuerzas armadas de otros países que entran dentro de las áreas de lo que ellos consideran amenazas transnacionales, asistencia humanitaria, actividades contra el narcotráfico, preparación para desastres, mantenimiento de la paz y desarrollo profesional de las fuerzas armadas de la región. Para ello realizan ejercicios, entrenamiento y educación combinada, comparten inteligencia y realizan operaciones y tareas de asistencia conjunta.

En cierto modo la asistencia y la financiación del Comando Sur es una de las pocas oportunidades para muchas fuerzas armadas del continente de poder realizar maniobras, operaciones y actividades formativas, y por ello es recibido muy positivamente, ya que el escaso presupuesto de estas les dificulta realizar estas operaciones sin la ayuda de Estados Unidos (la mayor parte de su presupuesto va destinado a pagar el personal).

En el año fiscal de 2001 el Comando Sur, según una presentación de un oficial suyo realizada en el 2002, contó con un presupuesto de 1.1 billones de dólares para realizar sus actividades. Con este dinero organizó un seminario sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones humanitarias en Costa Rica (a la que asisten representantes de 40 países), y un ejercicio de dirección de operaciones en caso de desastres en Honduras (al que asisten representantes de 23 países). También organizó 105 acciones cívicas y humanitarias en el continente (38 de ingeniería y 67 de asistencia médica a poblaciones pobres); maniobras de mantenimiento de la paz, tanto de despliegue de fuerzas como de comando y control (en la República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador, y otros países del Caribe); y un número importante de otras actividades educativas en la región misma. De ese presupuesto del Comando Sur, 384 millones de dólares se destinan a la lucha contra las drogas (CD), 57 a maniobras conjuntas (JCS EX), 6.8 a operaciones de asistencia humanitaria (OHDACA), 12.7 a los programas de educación y entrenamiento en Estados Unidos (IMET), 8.7 a programas de compras de armamento (FMS), y 15.2 a las actividades del estado mayor del Comando Sur en la región (TCA).

⁹ El reparto de este 35% es como sigue, según el Center for International Policy (2003): 116.5 millones son destinados a las bases estadounidenses de lucha contra drogas. 61.3 para la base de Manta de Ecuador (aeropuerto Eloy Alfaro); 10.3 para el aeropuerto Reina Beatriz en Aruba; 43.9 para el aeropuerto Hato Internacional en Curaçao; 1.1 para diseño y planeación. Las actividades de inteligencia regional se quedan con 7 millones, el programa de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos con 55.5 millones; la actualización de radares de los guardacostas de Estados Unidos con 68 millones. Al programa del Departamento del Tesoro "Drug Kingpin" se destinan 2 millones, y a un programa de vuelos de reconocimiento del Departamento de Defensa otros 30 millones. Ayuda para Perú son 32 millones, para Bolivia 110 y para Ecuador 20. Finalmente se apartan 18 millones para otros países.

¹⁰ Center for International Policy's, 2003.

los desplazados 37.5, para derechos humanos 51, para reformas judiciales 13, para fortalecimiento del cumplimiento de la ley 45 y para un fondo de paz 3 millones más. Este “Plan Colombia inicial”, más otras partidas aprobadas posteriormente por la administración George W. Bush hacen que la ayuda a este país sea por mucho la más importante de la región.

Como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre, la asistencia estadounidense se centra especialmente en la lucha contra los “terroristas” colombianos que “utilizan” las drogas para financiarse (FARC y ELN). El adiestramiento de colombianos para el combate contra sus grupos insurgentes impulsa a que el número de militares entrenados por Estados Unidos en el 2002 y el 2003 en América Latina aumente el doble que en años inmediatos. Así, mientras en 1999, 2.476 militares colombianos son entrenados por fuerzas estadounidenses, en el 2001 esta cifra sube a 6.300, durante el 2002 a 6.477 y en el 2003 alcanza los 12.947¹¹.

TABLA 3
Programas de ayuda contra narcóticos del Gobierno de los EE.UU.

Programas	Descripción
Control Internacional Narcóticos (INC)	Dependiente del Departamento de Estado. Aproximadamente dispone de 261 millones anuales. En 1999 le dotan con 493.6 millones.
Sección 124 Título 10, US Código (1989)	Permite fondos para operaciones contra droga, colocación de radares, vuelos de vigilancia, inteligencia conjunta. En 1998 se autorizan 135 millones.
Sección 1004 (National Defense Authorization Act de 1991)	Dependiente del Departamento de Defensa. Entrenamiento militares. Apoyo de material y de equipamiento militar.
Sección 1033 (National Defense Authorization Act de 1998)	Permite asistencia contra droga para Perú y Colombia de 1998 a 2002. 89 millones para patrullaje de ríos. Material, entrenamiento, mejora de comunicaciones.
Western Hemisphere Drug Elimination Act (WHDEA) de 1998	Autoriza aproximadamente 300 millones para equipos, entrenamiento y personal de 1998 a 2001. Adicionalmente 67.5 millones a través de los guardacostas para entrenamiento.
Fondos de Discreción Presidencial	El presidente dispone de 150 millones para control de narcóticos, asistencia de desastres y migraciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LA/C (1999).

¹¹ Isacson, *et al.* 2004a.

A pesar de la espectacularidad del reciente apoyo de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico, la administración estadounidense ha tratado de contrarrestar la afirmación de LA/C, sobre la supuesta intencionalidad de fomentar una carrera armamentista en la región. Se argumenta que desde la publicación del *International Security Assistance and Arms Export Control Act* de 1976, y de la consecuente *International Security and Development Cooperation Act* de la administración Carter, se complicó para la administración estadounidense vender armas a otros países. De hecho, una directiva de Carter publicada en 1977 prohíbe formalmente, hasta su revocación por Clinton en agosto de 1997, vender aviones de combate o armamentos de última tecnología en la región, lo que ha provocado, se señala, que en muchos casos se haya mirado hacia otra parte para buscar equipos y sistemas de armas.

TABLA 4
Ayuda a Colombia desde 1997 por programas (en millones de dólares).

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
						ESTIMADO	SOLICITADO
INC	33,40	56,50	200,11	688,05	46,35	253,00	284,20
FMF	30,00	0	0,44	0,02	4,49	6,00	98,00
IMET	0	0,89	0,92	0,90	1,04	1,18	1,18
Dis. Presidencial	14,20	41,10	58,00	0	0	0	0
Sección 1004	10,32	11,78	35,89	68,71	150,04	84,99	102,00
Sección 1033	0	2,17	13,45	7,23	22,30	4,00	13,20
Antiterrorismo (ATA)	0	0	0	0	N/A	25,00	N/A
EDA	0,09	0	0	0,41	0,46	0,44	0,44
Dis. Of NDCP ¹²	0,50	0	0	0	0	0	0
Apoyo Económico (ESF)	0	0	3,00	4	0	0	0
Asis. Desarrollo	0	0,02	0	0	0	0	0
INC (Desarrollo)	0	0,50	5,75	208,00	5,65	127,50	154,80
Total	88,56	112,96	317,56	977,32	230,33	502,11	653,82

Fuente: Elaborada por el Center for International Policy's (2003).

Para apoyar la idea de que los Estados Unidos no fomenta la carrera armamentista se suele recurrir a los datos presentados por diferentes agencias anualmente al Congreso. Según el informe de Richard F. Grimmett al Congreso de agosto del 2002, en el período de 1998 a 2001 la venta mun-

¹² Fondos discrecionales de la Oficina Nacional de Control de Drogas.

dial de armas fue de 134.9 billones de dólares, de la cual un 68.7% era a países en desarrollo y un 2.15% a América Latina.

En el periodo comprendido entre 1994 y 1997 el valor de las armas entregadas a América Latina desde diferentes países del mundo fue de 5.1 billones de dólares. Estados Unidos se ubica como el principal exportador con el 43.5% (2.2 billones). Le sigue el Reino Unido con un 7.8% (400 millones de dólares). Otros europeos venden el 17.5%. En el período 1998-2001¹³ el total fue de 2.9 billones, de los que Estados Unidos vendió el 59.2% (1.7 billones). Rusia, Francia y Alemania son los siguientes en ventas, cada uno de ellos con un 6.8%. El restante de europeos en conjunto exporta un 13.6%. Si bien es cierto las cifras muestran que en relación a otras partes del mundo la venta de armas a América Latina no es muy elevada, y que no es exclusivamente Estados Unidos el que vende armas en la región, este, con el objeto de defender “sus intereses”, ha sido históricamente el principal proveedor de armas en la región.

Anualmente la Defense Security Assistance Agency (DSAA) presenta al Congreso de Estados Unidos un informe que sintetiza tanto los programas de asistencia a la seguridad que han desarrollado en el mundo, como los criterios por los que se ha seguido una opción u otra. En el informe presentado en 1981 se afirma que la venta de armas estadounidenses a Latinoamérica ha sido relativamente pequeña (entre 1974-78 aproximadamente un 17% del total). La principal preocupación de este informe es que, según se señala, “a pesar de tratar de limitar la venta para no generar tensiones en el área, otros países europeos han estado proveyendo armamento”, con lo que esas restricciones impuestas por el Congreso han tenido poco efecto. En este sentido hay riesgo de que se afecte la estabilidad en Ecuador-Perú, en Centroamérica, y en Argentina-Chile, que protagonizan en una tensión fronteriza en esta época¹⁴.

¹³ Grimmett (2002) señala que Rusia entrega 20 helicópteros. Estados Unidos 29 piezas de artillería, 15 APC y carros de transporte blindados, 2 buques de superficie mayores, 36 helicópteros y 9 misiles antibuque. China entrega 4 buques de superficie menores. Los cuatro mayores productores de Europa, colectivamente: 80 tanques y cañones autopropulsados, 120 APC y carros de transporte blindados, 2 buques de superficie mayores, 2 buques de superficie menores, 4 buques con misiles dirigidos, 1 submarino, 10 helicópteros, 90 misiles aire-aire y 30 misiles antibuque. Otros productores europeos entregan 320 tanques y cañones autopropulsados, 40 APC y carros de transporte blindados, 8 buques de superficie mayores, 85 buques de superficie menores, 20 helicópteros y 460 misiles aire-aire. Otros productores no europeos entregan 50 piezas de artillería y 20 aviones de combate supersónicos.

¹⁴ DSAA, 1981.

En el informe de 1983 se señala con bastante claridad la inquietud que generaba la creciente influencia soviético-cubana en la distribución de armamento en la región. Estados Unidos, se indicaba, debe ayudar a los países que considera amigos ante esta amenaza, especialmente en la región centroamericana y en el Caribe¹⁵. En 1984 se confirma la llegada de nuevos MIG-23 a Cuba, y el apoyo de este país, conjuntamente con Nicaragua, a las guerrillas en El Salvador, Guatemala y Colombia. Los programas que se aprueban en Estados Unidos pretenden mantener la “estabilidad” de la región, y el equipamiento que se envía a los países amigos corresponde a este objetivo (DSAA, 1984). Respondiendo a la “amenaza” de los MIG-23, se permitirá, rompiendo la prohibición de 1977, la compra de F-16 por la fuerza aérea venezolana, y la constitución de unas fuerzas aéreas de mediana influencia y solvencia en República Dominicana y Honduras.

A principios de los noventa la situación se modifica de forma importante. Acabada la guerra fría, la amenaza soviética desaparece y la cubana se relativiza. Pronto llegan los acuerdos de paz en Centroamérica, y los objetivos cambian. En un principio estos son fortalecer la democracia, apoyar programas sociales, de desarrollo, y seguir mejorando la educación militar profesional de los militares de la región para que se acomoden a la democracia y a los valores de derechos humanos¹⁶.

En efecto, cambian tanto los objetivos que el informe al Congreso deja de llamarse *Security Assistance Program*, y pasa a denominarse *Congressional Presentation for Promoting Peace*¹⁷, lo que permite, hasta el ataque a las torres gemelas, que un interés importante del gobierno de Estados Unidos fuera privilegiar la democracia y el control civil sobre las fuerzas armadas latinoamericanas. Se fomenta la creación de ministerios de defensa integrados por civiles, la elaboración de libros blancos de defensa¹⁸ y la publicación de medidas de transparencia, apoyándose estas medidas tanto diplomáticamente como a través de la creación de instituciones como el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS), que se funda en Washington D.C. en 1997, con la misión de educar a civiles en asuntos de defensa. Los reajustes

¹⁵ DSAA, 1983.

¹⁶ DSSA, 1990.

¹⁷ DSAA, 1995.

¹⁸ Los libros blancos de defensa son instrumentos de transparencia y de confianza mutua entre países. El proceso de elaboración de estos documentos ha buscado en América Latina la participación de sectores amplios de la población en la discusión sobre cuál debe ser la política de defensa de su país y cuáles son los medios más adecuados para lograr su efectividad en un contexto democrático.

sufridos después del septiembre de 2001, hacen que este objetivo “idealista” deje paso libre a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

3. LA ASISTENCIA MILITAR ESTADOUNIDENSE EN AMÉRICA LATINA ENTRE 1980 Y 2000

A continuación se describen con detalle la ayuda militar estadounidense para América Latina en las décadas de los ochenta y los noventa. Se presenta la explicación ordenando la información por regiones para que se puedan valorar más adecuadamente los diferentes escenarios. A pesar de que también reciben asistencia militar, no se tratará sobre los países del Caribe de habla diferente a la española ni tampoco de los países que no tienen “formalmente” ejércitos. La ayuda recibida a través del *Military Assistance Program* es a lo largo de este período bastante escasa, y las compras de los países de América Latina a Estados Unidos utilizando el FMS –la venta directa de un gobierno a otro– y el DEA –materiales excedentes de las fuerzas armadas estadounidenses– es relativamente poco importante. La asistencia militar se centra sobre todo en el entrenamiento militar de los ejércitos latinoamericanos.

Una de las principales conclusiones que se derivan de este análisis es que la asistencia militar de los Estados Unidos no es constante para ninguna región, y esta más bien se centra en lugares y momentos en los que Estados Unidos ha tenido especial interés debido a situaciones específicas.

3.1 Asistencia militar en el Cono Sur

Los países del Cono Sur inician la década de los ochenta con dictaduras militares que notoriamente han atentado contra los derechos humanos. Ello condiciona la ayuda militar estadounidense que afirma defender la democracia y la profesionalidad de los militares. Durante estos años la ayuda es negada a estos países.

En 1983 se levanta la prohibición de apoyar militarmente a Argentina –aunque esta sigue siendo restringida hasta 1989 cuando el gobierno Menem asume el poder– y se retoma la asistencia militar a través del IMET. En el caso chileno, la enmienda Kennedy-Harkin permanece en vigor durante la duración del régimen militar, limitándose tanto la asistencia como el entrenamiento militar en Estados Unidos. En Paraguay la prohibición de colaboración se extiende de 1978 a 1982 y en Uruguay de 1977 a 1982.

Esta prohibición de asistencia es repetidamente criticada en los documentos conjuntos que presentan al Congreso de Estados Unidos el Departamento de Estado y el de Defensa. En opinión de estos, la asistencia militar es positiva porque permite mostrar valores como la convivencia de las fuerzas armadas con la democracia o el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, la inexistencia de puntos de contacto es negativa para Estados Unidos porque pierde relación e influencia en la región, siendo otras potencias mundiales las que la ejercen¹⁹.

El levantamiento parcial de la prohibición en 1983 hace recomendar que se permita que Argentina reciba piezas de repuesto para el material estadounidense adquirido previamente, mejorándose la eficacia operacional y la seguridad de los equipamientos²⁰. En 1986 se aconseja iniciar nuevamente los programas de entrenamiento, porque se teme que se van a perder los grados de contacto y de entendimiento con los nuevos generales argentinos, yéndose más allá al señalarse que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan de nuevos materiales, después del desastre de Malvinas, como helicópteros de transporte, aviones de ala fija y transporte, sistemas de defensa antiaérea y equipos de comunicación²¹. A raíz del apoyo de Menem en el Golfo Pérsico, y la normalización de sus relaciones con el Reino Unido, finalmente en 1992 se recomienda que se inicie la restauración de las capacidades logísticas y la modernización de los equipamientos argentinos, especialmente en aviones de transporte y radares²². Derivado de esta política en 1994 se reconoce el apoyo argentino en Croacia y se insiste en la provisión de aviones C-130 (de transporte) y de helicópteros UH-1H para aumentar la eficacia en operaciones de paz y contra narcóticos²³. También durante este período se realiza la adquisición más importante a Estados Unidos: la reforma de 36 aviones de caza A-4, que se compran a los marines norteamericanos, y se actualizan por un valor aproximado de unos 83 millones de dólares²⁴.

¹⁹ DSAA, 1981, 1983, 1986, 1990, 1994.

²⁰ DSAA, 1983.

²¹ DSAA, 1986.

²² DSAA, 1992.

²³ DSAA, 1994.

²⁴ Según los diferentes DSAA entre 1983 y 1993 Argentina recibe productos excedentes (DEA) valorados en los siguientes precios en miles de dólares: 1987: 92 (valor original: vo), 45 (valor de adquisición: va); 1991: 80 (vo) 36 (va); 1993: 15.215 (vo), 1.560 (va). No constan datos para el período 1994-95. De 1996 al año 2001 según Isacson *et al.* (2004b): 1996: 32.869 (vo), 8.953 (va); 1997: 11.160 (vo), 738 (va); 1998: 16.920 (vo), 3.990 (va); 1999: 23.466 (vo), 5.320 (va); 2000: 575 (vo), 230 (va); 2001: (0); 2002: 8.478 (va) 848 (va); 2003: 360 (vo), 180 (va). Por “valor original” se entiende el valor que el producto recibe en el momento de su fabricación. Por “valor de adquisición” el precio que Argentina u otro país que compra a través del DEA paga por el producto.

Chile es un actor importante a nivel regional, y así lo reconocen los documentos presentados al Congreso de Estados Unidos. Tímidamente levantada la prohibición de colaboración, en 1983 se facilitan piezas de repuesto para material original estadounidense (aviones F-5, A/T-37, C-130 y helicópteros UH-1). También se apoya con otro tipo de material y se retoma el entrenamiento²⁵. Lo mismo se vuelve a recomendar en 1986 y 1990, insistiéndose en que la formación estadounidense sirve para apoyar la democracia y reforzar los derechos humanos²⁶. En 1994 se reconoce el apoyo de este país en diferentes misiones de paz (en el Golfo Pérsico, Israel, India/Paquistán, Camboya y El Salvador) y en la lucha contra el narcotráfico. En 1991 se entregan 3 millones de dólares para reactualizar sistemas de armas de origen estadounidense, la compra de dos helicópteros UH-1H y cuatro aviones C-130B a través del programa DEA²⁷. El principal apoyo que se sugiere es incrementar el número de oficiales entrenados en Estados Unidos, que como se ve en la tabla número 5 aumenta de manera importante en la década de los noventa²⁸.

Los casos de Paraguay y Uruguay son representativos de países pequeños, en los que el escaso valor estratégico explica fuerzas de tamaño mediano. Estos no reciben prácticamente ayuda, excepto en los últimos años en concepto de entrenamiento. En el caso paraguayo se reconoce el apoyo de estas fuerzas armadas al desarrollo interno del país, y se insiste en la necesidad de fomentar programas de intercambio educativo²⁹. A partir de 1990 se señala la importancia de este país para el control de las drogas, insistiéndose en 1994 en que los paraguayos no tienen recursos para luchar contra esta amenaza por ellos mismos. Asimismo se reconoce la autorización para que vuelos AWACS de control antinarcóticos en Bolivia sobrevuelen el espacio aéreo paraguayo³⁰.

Uruguay es un país con mayores recursos económicos que Paraguay y ello se nota en el valor de sus adquisiciones. Se reconoce su apoyo en

²⁵ DSAA, 1983.

²⁶ DSAA, 1986.

²⁷ Según DSAA (1981-1995) el valor de adquisiciones de Chile a través del programa DEA en miles de dólares es el siguiente: 1992: 4.428 (vo), 1.118 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) en 1996: 2.232 (vo), 257 (va); 1998: 66.078 (vo), 16.618 (va); 1999: 150 (vo), 15 (va); 2001: 2.369 (vo), 594 (va).

²⁸ DSAA, 1994.

²⁹ DSAA, 1986.

³⁰ El programa DEA beneficia a Paraguay de la siguiente forma. En miles de dólares. Según DSAA (1981-1995) 1980: 426 (vo), 86 (va); 1981: 52 (vo), 10 (va); 1982: 529 (vo), 112 (va); 1991: 526 (vo), 35 (va); 1992: 2.208 (vo), 4 (va). Según Isacson, *et al.* (2004b) 1996: 75.700 (vo), 3.784 (va). Ver DSAA, 1994.

operaciones de observación de la paz en Medio Oriente y su apoyo a la política de Estados Unidos. En 1986 se solicita un mayor esfuerzo para poder tener más contacto profesional entre los militares estadounidenses y los uruguayos, y la posibilidad de que estos refuercen su fuerza aérea con la adquisición de dos aviones A-37B, a través del programa DEA que reemplace a dos aviones que se perdieron en unos ejercicios de entrenamiento³¹. También se recomienda mayor ayuda para patrullaje marítimo y acciones de búsqueda y rescate, y en 1994 se solicita repuestos para actualizar sistemas de armas anticuados de origen estadounidense³².

TABLA 5
Datos de la ayuda militar estadounidense en el Cono Sur

Valor de la ayuda militar de los EE.UU.	MAP 1950/2000	MAP 1981/85	MAP 1986/90	MAP 1991/95	MAP 1996/2000
Argentina	34.034			14	
Chile	83.931			3.463	
Paraguay	9.325	70	2		
Uruguay	40.770	77			

Valor de la compra a los EE.UU.	Compra material 1950/2000	Compra material 1981/85	Compra material 1986/90	Compra material 1991/95	Compra material 1996/2000
Argentina	279.430	14.250	11.973	32.061	45.864
Chile	200.172		525	16.858	10.634
Paraguay	1.304	233	2	61	271
Uruguay	35.570	2.751	3.687	6.392	5.402

Número Estudiantes	Estudiantes 1950/2000	Estudiantes 1981/85	Estudiantes 1986/90	Estudiantes 1991/95	Estudiantes 1996/2000
Argentina	5.237		72	297	736
Chile	8.667			847	903
Paraguay	2.565	57	82	127	158
Uruguay	3.654	79	99	219	319

Fuente: Elaboración personal a partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1990, 2000). Datos en miles de dólares. Estudiantes en número real.

³¹ DSAA, 1986.

³² DSAA (1981-1995) adquisiciones de Uruguay a través del DEA en miles de dólares: 1980: 453 (vo), 140 (va); 1993: 1.053 (vo) 73 (va). Isacson *et al.* (2004b); 1996: 8.402 (vo) 1.051 (va); 1999: 1.080 (vo) 432 (va).

3.2 *Asistencia militar en la región andina*

El caso de la región andina es diferente para los intereses estadounidenses. En esta zona se han concentrado durante las últimas décadas parte de los problemas que tienen influencia sobre Estados Unidos, lo que a su vez ha tenido consecuencias en la política de la potencia hacia el hemisferio en materia de ayuda militar. Por una parte la guerra fría y la amenaza aérea soviético-cubana permitieron que se autorizara a Venezuela la compra de 24 aviones caza F-16 a principios de los años 80³³. Por otra, el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador y el problema de las drogas, que afecta de alguna forma a todos los países de la región, motivó la decisión de enfrentar el problema apoyando sobre todo a Colombia³⁴, Ecuador, Bolivia y en menor medida a Perú.

TABLA 6
Datos de la ayuda militar estadounidense en la región andina.

Valor de la ayuda militar de los EE.UU.	MAP 1950/2000	MAP 1981/85	MAP 1986/90	MAP 1991/95	MAP 1996/2000
Bolivia	44.643	591	219	6.860	5.169
Colombia	164.774		25.415	28.566	28.615
Ecuador	36.488		1.080	1.855	1.594
Perú	76.667				1.715
Venezuela	2.558				2.525

Valor de la compra a los EE.UU.	Compra material 1950/2000	Compra material 1981/85	Compra material 1986/90	Compra material 1991/95	Compra material 1996/2000
Bolivia	16.275	10	12.153	2.427	782
Colombia	576.755	43.387	93.137	211.748	199.458
Ecuador	165.269	53.630	41.570	24.707	7.966
Perú	199.908	232	18.963	8.057	7.160
Venezuela	1.000.117	621.196	176.458	89.683	96.550

³³ Por un valor de unos 684 millones de dólares según entrevista personal con el general de brigada de la Fuerza Aérea venezolana Boris Saavedra (que participa en las negociaciones para la adquisición de este material).

³⁴ La escalada de la implicación de Estados Unidos en este conflicto se agudiza recientemente, como se ha visto con la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de un paquete de 1.3 billones de dólares para combatir el narcotráfico. Este ha sido el mayor “paquete” que nunca esta administración ha aprobado en la región. Según el documento “U.S. security assistance to the Andean region, 2000-2001” del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con el mismo documento, en 1999 Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú recogen el 90% de ayuda militar y para la policía de la región, y más del 50% de militares entrenados por los EEUU. Un caso interesante es

Número Estudiantes	Estudiantes 1950/2000	Estudiantes 1981/85	Estudiantes 1986/90	Estudiantes 1991/95	Estudiantes 1996/2000
Bolivia	6.488	99	308	605	372
Colombia	23.136	3.476	4.009	3.823	1.663
Ecuador	10.064	1.168	779	761	641
Perú	10.026	1.079	131	163	277
Venezuela	7.145	187	290	384	508

Fuente: Elaboración personal a partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1990, 2000). Datos en miles de dólares. Estudiantes en número real.

A pesar de ser uno de los países más pobres del continente, y de la inestabilidad de su sistema político, Bolivia ha recibido desde Estados Unidos principalmente ayuda militar (sobre todo para la lucha contra el narcótico). En 1986 se justificó la ayuda militar basándose en que la mayoría del equipo boliviano se encontraba en un estado de conservación deficiente, y por lo tanto necesario de volverlo operativo para afrontar el combate contra las drogas. El MAP se utiliza para modernizar piezas de tres helicópteros “Huey” y de algunos camiones y armas de infantería³⁵.

A partir de este momento la apuesta fue potenciar la adquisición de capacidades como un número limitado de helicópteros, lanchas patrulleras para controlar lagos y ríos y algunos vehículos de transporte. En 1987 Bolivia empieza en relación con Estados Unidos una campaña de erradicación del cultivo de coca, elaborando en 1988 una ley antinarcóticos que establece severas condenas para los traficantes. Según el documento presentado al Congreso estadounidense en 1990, tanto los esfuerzos de erradicación como de interdicción van a depender del material, la ayuda y el entrenamiento provéido por Estados Unidos. Segundo productor de coca y cocaína del mundo – según el documento presentado en 1994–, el esfuerzo debía incrementarse especialmente a través de la asistencia a la Marina boliviana y Fuerza Aérea que realizan tareas de vigilancia. En 1994 Bolivia recibe una ayuda de 100 millones de dólares, la mayoría de ellos destinados a apoyo económico y de desarrollo, endeudándose en 34 millones de dólares para pagar parte del material que compra en su esfuerzo contra el narcotráfico³⁶.

la reducción de estudiantes provenientes de Colombia desde el año 1995. Una explicación es que este entrenamiento se haya desarrollado en territorio colombiano.

³⁵ DSAA, 1986.

³⁶ Por otra parte en lo que hace relación al material del programa DEA, según DSAA (1981-1995), Bolivia recibe material valorado en los siguientes miles de dólares: 1980: 553 (vo) 413 (va); 1989: 11 (vo) 4 (va). Según Isacson *et al.* (2004b): 1996: 90.000 (vo) 4.500 (va); 1999: 4.445 (vo) 1.333 (va); 2000: 25.956 (vo) 6.000 (va); 2001: (0); 2002: 3.300 (vo) 459 (va); 2003 (0).

Colombia es el gran receptor de la ayuda militar estadounidense durante las dos últimas décadas del siglo veinte. Su posición estratégica en el canal de Panamá y Centroamérica, la influencia soviético-cubana en las guerrillas y la erradicación del cultivo y del tráfico de drogas han acercado a este país a los intereses de Estados Unidos. A partir de 1986 la ayuda estadounidense se incrementa solicitándose la compra de helicópteros y piezas para el mantenimiento de aviones y barcos. Asimismo se pide armamento ligero para la infantería, vehículos de transporte y un número limitado de misiles antitanque y equipo de ingeniería. Todo ello se complementa con un número muy elevado de militares colombianos entrenados tanto en Panamá como en Estados Unidos.

Hacia 1990 la colaboración continúa en los mismos niveles confirmando la política de ayuda en 1994 al adquirirse aviones de ala fija, helicópteros, radares y otros sistemas de interdicción³⁷. Finalmente, Colombia no es uno de los grandes beneficiarios del programa DEA, lo que quizás confirma la seriedad del compromiso por parte de Estados Unidos con este país, al no ofrecerle material de segunda mano. Según los reportes al Congreso del DSAA entre 1981 y 1995 Colombia recibe a través de este programa material valorado en las siguientes cantidades (en miles de dólares): 1989: 57 (valor original: vo) 20 (valor adquisición: va); 1993: 1.051 (vo) 80 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) en 1997: 1.857 (vo) 91 (va); 2000: 926 (vo) 405 (va); 2001: 1.150 (vo) 460 (va); 2002: 2.100 (vo) 2.365 (va); 2003: 33.947 (vo) 3.397 (va).

Ecuador y Perú comparten algunas características que les han hecho permanecer en el centro de la atención de los gobiernos estadounidenses durante el período analizado. Ambos países se encuentran en uno de los escenarios geográficos principales de la lucha contra las drogas. En los dos casos las instituciones castrenses cuentan con amplia autonomía de sus gobiernos, poseen funciones en el desarrollo interno del país y cierto reconocimiento positivo entre la población.

La ayuda estadounidense a Perú y Ecuador a lo largo de estas dos décadas privilegia a Ecuador –véase tabla 6– tanto en ayuda del MAP como estudiantes entrenados y cantidad de material que se distribuye. Esta tendencia se confirma con la construcción de una base militar en Manta (Ecuador) en 1999 y que se convirtió en una pieza clave de la estrategia en la lucha contra las drogas de Estados Unidos en la región.

³⁷ DSAA, 1994.

Después del conflicto de 1981 es muy importante el número tanto de ecuatorianos como de peruanos que reciben entrenamiento³⁸. En ese año se refuerza la capacidad defensiva de Ecuador con misiles aire-aire, equipos de comunicaciones, generadores eléctricos, municiones, misiles antitanques, y camiones, argumentándose que la cantidad y calidad del material soviético que los peruanos han acumulado desequilibra el escenario regional. En 1983 se sigue alimentando “el derecho” a la defensa propia de los ecuatorianos financiándose la compra de aviones C-130H, A-37, de patrullaje marítimo, tanques, vehículos de transporte y sistemas de defensa antiaéreas. También se justifican radares y otros instrumentos de comunicación³⁹.

A partir de 1990 la ayuda se concentra específicamente en la lucha contra el narcotráfico, manteniéndose para el caso de Ecuador el importante número de militares entrenados en Estados Unidos, y fortaleciéndose los sistemas de radares y antiaéreos⁴⁰. En el caso de los peruanos, la insistencia de los programas de asistencia deriva en la intención de no perder contacto con los militares de ese país para que no se vuelvan hostiles a Estados Unidos. A partir de 1986 los estadounidenses intensifican los programas de ayuda hacia el Perú para que se combata a Sendero Luminoso y al narcotráfico. Para ello se facilitan helicópteros de observación y se apoya la adquisición de lanchas, vehículos de transporte para tropas y sistemas de comunicación. En 1990 la deuda contraída con el gobierno de Estados Unidos para comprar armamento llega a los 140 millones de dólares⁴¹. Finalmente en abril de 1992, tras el golpe de Estado de Fujimori, se suspende la ayuda militar⁴².

Venezuela dispone de abundantes recursos financieros gracias al petróleo, y ha pasado desde constituir para Estados Unidos una democracia estable y un importante aliado en la región a un gobierno hostil con un

³⁸ DSAA, 1981.

³⁹ DSAA, 1983.

⁴⁰ En 1992 Ecuador presentaba una deuda por adquisición de material militar de casi 107 millones de dólares (DSAA 1994: 172). El programa DEA según DSAA (entre 1981-1995) distribuye a Ecuador material por valor –en miles de dólares– de: 1990: 3.951 (vo) 970 (va); 1991: 7.046 (vo) 590 (va); 1992: 1.756 (vo) 450 (va); 1993: 9.132 (vo) 3.194 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) 1996: 281 (vo) 14 (va); 1997: 375 (vo) 77 (va); 2001: 241 (vo) 12 (va); 2002: 165 (vo) 45 (va); 2003: (0).

⁴¹ DSAA, 1990.

⁴² Que debe volverse a restablecer en 1996 porque según Isacson *et al.* (2004b) Perú recibe material del DEA por valor de –en miles de dólares–: 1996: 4.994 (vo) 1.249 (va); 1999: 31.364 (vo) 1.568 (va). Previamente, según el DSAA (1981-1995), Perú recibe material en 1982: 4.064 (vo) 2.876 (va); y en 1992: 2.657 (vo) 304 (va).

congelamiento de las relaciones. Los recursos económicos propios han sido la razón principal por la que Venezuela, sin recibir ayuda económica de los estadounidenses, haya podido adquirir materiales valorados en más de un billón de dólares. En 1981 el documento del DSAA consideró a Venezuela clave en la estabilidad de la región del Caribe, por compartir valores con los estadounidenses. En 1983 los estadounidenses refuerzan la idea de que Venezuela se opone activamente a las actividades cubanas, y que su influencia es muy positiva en el área centroamericana, lo que justifica que estos soliciten productos que refuercen el apoyo marítimo para su aviación, el mantenimiento de las piezas para sus aviones y helicópteros y la adquisición de aviones de combate y sistemas de defensa aérea. En 1986 se sigue defendiendo frente al Congreso que Venezuela es una democracia líder y que su participación es fundamental en la búsqueda de la paz y la consolidación de la democracia en Centroamérica y el Caribe. Se apuesta en ese entonces por seguir autorizando la venta de piezas de repuesto y materiales para que la fuerza aérea venezolana sea competitiva⁴³.

En 1990 se amplía el espectro de las misiones en las que las Fuerzas Armadas venezolanas colaboran con Estados Unidos al hacerse referencia a la lucha contra el narcotráfico. Esto significó que el gobierno estadounidense ayudó al venezolano para que ampliara sus capacidades de patrullaje de las fronteras y mejorara las actividades de las contraguerrillas apoyando la modernización tanto de su material como del entrenamiento de sus militares⁴⁴. En 1994 el objetivo se centra básicamente en apoyar la modernización de los equipos y de la logística para la lucha antinarcóticos y en mantener la seguridad de las reservas petroleras del país. Para ello se sigue vendiendo avanzados sistemas de aviónica, armamento de actualizaciones para los F-16 y otros aviones, y se apoya la reactualización de unas fragatas de la Marina⁴⁵. En relación al programa de material excedente EDA Venezuela, al igual que Colombia, no es de los países más beneficiados por Estados Unidos. Según los diferentes documentos que el DSAA presenta al Congreso, recibe material por el siguiente valor (en miles de dólares): en 1980: 242 (vo) 184 (va); 1989: 143 (vo) 50 (va); 1991: 13.310 (vo) 3.006 (va). Por otra parte según Isacson *et al.* (2004b) en 1996: 521 (vo) 208 (va); y en 1998: 750 (vo) 150 (va).

⁴³ DSAA, 1986.

⁴⁴ DSAA, 1990.

⁴⁵ DSAA, 1994.

3.3 Asistencia militar a Brasil y México

Brasil y México son los únicos países en la región que por población y tamaño pueden tratar de competir en influencia con Estados Unidos. Ambos países no reciben en concepto militar casi ninguna ayuda (apenas 32 millones de dólares México desde el año 1986 hasta el 2000). A pesar de ello, y de poseer una industria militar propia, Brasil es uno de los máximos compradores de material bélico de la región. Por otra parte México envía un número elevado de militares a formarse a Estados Unidos y recibe una importante cantidad de material a través del programa ADE.

TABLA 7
Datos de la ayuda militar estadounidense a Brasil y México

Valor de la ayuda militar de los EE.UU.	MAP 1950/2000	MAP 1981/85	MAP 1986/90	MAP 1991/95	MAP 1996/2000
Brasil	207.163				
México	32.076		876	26.057	5.812

Valor de la compra a los EE.UU.	Compra material 1950/2000	Compra material 1981/85	Compra material 1986/90	Compra material 1991/95	Compra material 1996/2000
Brasil	777.358	38.235	122.294	165.653	206.820
México	211.662	93.936	39.594	31.604	26.130

Número estudiantes	Estudiantes 1950/2000	Estudiantes 1981/85	Estudiantes 1986/90	Estudiantes 1991/95	Estudiantes 1996/2000
Brasil	9.074		40	123	150
México	3.342	307	296	642	867

Fuente: Elaboración personal a partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1990, 2000). Datos en miles de dólares. Estudiantes en número real.

Entre 1977 y la restauración de la democracia en Brasil en 1985, las relaciones militares entre Estados Unidos y Brasil son escasas. Si bien el gobierno brasileño revoca los acuerdos de asistencia y cooperación militar, se mantiene un cierto grado de relaciones ya que para los estadounidenses es importante tener contacto con las Fuerzas Armadas más importantes y sofisticadas de la región (que además poseen una influyente industria productora de armas). En febrero de 1984 ambos países firman un memorándum de cooperación en materias de industria militar y nuevamente inician un programa que, aunque modesto, manifiesta un interés de entendimiento. A partir de ese momento se asiste a los brasileños para mejorar sus capacidades de vigilancia aérea y marítima.

En 1986 se espera que los brasileños adquieran helicópteros, aviones de ala fija, misiles aire-aire y diferentes partes de materiales de origen estadounidense⁴⁶. El programa propuesto para 1990 sigue alimentando esta dirección ofreciendo la venta de los sistemas “Harpoon”, “Maverick” y diferentes piezas de repuestos, aviónica y municiones. Se plantea permitir la venta de torpedos y de sistemas de radares y comunicaciones que actualicen las capacidades de la Marina brasileña⁴⁷. En 1994 se mantiene la misma política ampliándose esta a la venta de una serie de helicópteros UH-1H modernizados⁴⁸.

México recibe ayuda fundamentalmente para la lucha contra el narcotráfico. A partir de 1990, la lista de países elegibles para acceder al programa del DEA se amplía a los países productores de drogas⁴⁹ y ello hace que este país empiece a recibir tanto material a través de este programa como asistencia de entrenamiento en Estados Unidos. Según el DSAA (1981-1995) el valor del material que recibe México es el siguiente (en miles de dólares): para 1990: 11.040 (vo) 1.462 (va); 1991: 12.257 (vo) 1.630 (va); 1992: 19.122 (vo) 1.527 (va); 1993: 4.973 (vo) 250 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) en 1996: 13.161 (vo) 11.382 (va); en 2001: 860 (vo) 172 (va); 2002: 99 (vo) 5 (va); 2003: 292 (vo) 25 (va).

Isacson señala que en 1997, 1998 y 1999 México no acepta el material que es tratado de ser vendido por Estados Unidos bajo esta partida⁵⁰ ya que tienen que regresar unos helicópteros deficientes. En 1990 el DSAA establece la necesidad de modernizar los aviones F-5 mexicanos para desarrollar sus funciones contra el narcotráfico y le vende radares “Westinghouse”⁵¹. Finalmente en 1994 se apoya aumentar el número de militares formados en Estados Unidos y la venta de material de comunicaciones, camiones, equipamientos GPS, vehículos de transporte blindados, lanzadores de granadas, helicópteros Bell 212S, radares de vigilancia, aviones de transporte C-130S, patrulleras, barcos de vigilancia y fragatas (DSAA, 1994).

⁴⁶ DSAA, 1986.

⁴⁷ DSAA, 1990.

⁴⁸ En cuanto a material entregado a través del DEA los DSAA (1981-1995) reconocen en miles de dólares para 1991: 11 (vo) 5 (va); 1992: 29.059 (vo) 1.711 (va); y 1993: 19 (vo) 8 (va). Isacson *et al.* (2004b) señalan para 1999: 2.010 (vo) 600 (va); 2001: 237.984 (vo) 17.777 (va); 2002: 923 (vo) 93 (va); 2003 (0).

⁴⁹ DSAA, 1991.

⁵⁰ Isacson *et al.* (2004b)

⁵¹ DSAA, 1995.

4. ASISTENCIA MILITAR EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

El caso centroamericano tiene características propias por las guerras que se viven en la región durante los años ochenta y principios de los noventa. Esta circunstancia se muestra con claridad tanto en la ayuda oficial que El Salvador y Honduras reciben como sobre todo en la cantidad de material que les es permitido comprar durante el periodo del conflicto. Para economías como las centroamericanas y presupuestos como los de esas fuerzas armadas este dato es realmente significativo. A nivel general, el número de estudiantes hondureños y salvadoreños que son invitados por IMET es importante, especialmente en el período de la guerra, pero también en la década de los noventa.

En el caso de la República Dominicana su posición pro estadounidense y su colaboración en la tarea de neutralizar la influencia cubana en el Caribe también le hace merecedor de ayudas, especialmente cuando se incentivó la lucha contra las drogas y el control de la inmigración ilegal haitiana en la década de los noventa.

TABLA 8
Datos de la ayuda militar estadounidense a Centroamérica

Valor de la ayuda militar de los EE.UU.	MAP 1950/2000	MAP 1981/85	MAP 1986/90	MAP 1991/95	MAP 1996/2000
Cuba	8.552				
El Salvador	74.238	67.621	2.033	196	
Guatemala	16.247	19			
Honduras	25.211	10	19.663	198	171
Nicaragua	7.668				
República Dominicana	28.189	14		4.771	1.865

Valor de la compra a los EE.UU.	Compra material 1950/2000	Compra material 1981/85	Compra material 1986/90	Compra material 1991/95	Compra material 1996/2000
Cuba	4.510				
El Salvador	893.627	239.626	422.913	200.207	44.215
Guatemala	58.535	148	19.096	6.898	
Honduras	414.463	60.638	245.722	73.092	29.545
Nicaragua	5.205				
República Dominicana	32.156	9.206	13.905	5.556	1.447

Número estudiantes	Estudiantes 1950/2000	Estudiantes 1981/85	Estudiantes 1986/90	Estudiantes 1991/95	Estudiantes 1996/2000
Cuba	523				
El Salvador	7.642	2.595	1.393	761	660
Guatemala	4.635	123	498	150	234
Honduras	9.413	1.568	1.489	1.059	843
Nicaragua	5.960				220
República Dominicana	6.865	781	542	503	270

Fuente: Elaboración personal a partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1990, 2000). Datos en miles de dólares. Estudiantes en número real.

La posición estadounidense en relación a El Salvador era clara hacia 1983. El presidente Duarte y su gobierno están tratando de llegar a soluciones pacíficas, pero la presión y la amenaza “de las bien armadas guerrillas terroristas marxistas-leninistas, que reciben extenso apoyo de Cuba y otros países comunistas”, hacen que esto sea imposible⁵². La propuesta al Congreso estadounidense en el terreno militar es facilitar entrenamiento, compra de material de guerra, y financiación para la adquisición de esta. Se adquieren lanchas patrulleras, helicópteros, vehículos, equipos de ingeniería y de comunicaciones, armamento, munición y piezas de recambio para los sistemas que necesiten ser reparados⁵³.

En 1986 la situación se percibía de forma similar. Cubanos y nicaragüenses conspiraban contra El Salvador, y resultaba legítimo que este país se defendiera de la agresión. Para ello se financia la compra de aviones de ataque, helicópteros de observación y transporte, lanchas patrulleras, armas de infantería y sistemas de comunicación. En 1990, el informe del DSAA afirma que es claro que el Ejército está venciendo a las guerrillas por lo que se recomienda el mantenimiento de los programas, que además de los fondos destinados para material militar incluye recursos para la reconstrucción económica del país. Finalmente en 1994, después de los acuerdos de paz y una guerra que había costado más de 4 billones de dólares a las arcas de los estadounidenses⁵⁴, se señalaba que era necesario continuar apoyando la reconstrucción del país, y promover la reestructuración de las Fuerzas Armadas al período de paz. Ese año se aporta una ayuda de 138 millones

⁵² DSAA, 1983.

⁵³ DSAA, 1983.

⁵⁴ DSSA, 1994.

de dólares para El Salvador, reconociéndose que en el año 2002 la deuda habrá ascendido a unos 223 millones de dólares en fondos FMF⁵⁵.

Durante la década de los ochenta, Guatemala presentaba varias acusaciones de violación a los derechos humanos, por lo que no calificaba para recibir ayuda estadounidense. Al mismo tiempo, se encontraba en el medio de un conflicto que situaba a su gobierno en la órbita de Estados Unidos. El DSAA en 1983 quiere solucionar este dilema y recomienda que se busquen caminos para que se puedan defender de las guerrillas y al mismo tiempo incrementar la “sensibilidad” de los militares en relación al control de los abusos sobre la población civil. Esos caminos pasaban por intensificar la formación de los militares guatemaltecos y revisar cuidadosamente las peticiones que se hicieran de adquisición de armas⁵⁶.

En 1986 finalmente se encuentra una fórmula: se aumenta tanto el entrenamiento como la adquisición de material militar, desde piezas para reparar motores de vehículos, aviones y helicópteros hasta compras de helicópteros de transporte, camiones y sistemas de comunicaciones⁵⁷. En 1990 se reconoce que la suspensión de asistencia a Guatemala entre 1977 y 1986 ha afectado seriamente a las capacidades de las Fuerzas Armadas, y que estas necesitan piezas para reparaciones y reemplazos de algunos equipos para combatir contra las guerrillas⁵⁸. A pesar de ello, por cuestiones de violaciones de los derechos humanos, a fines de 1990 se suspende la ayuda estadounidense manteniendo un reducido contacto con los guatemaltecos a través del programa IMET⁵⁹.

Honduras es otro destacado aliado de Estados Unidos en la región. En el país existe una importante base militar de la Fuerza Aérea⁶⁰ que además permite la existencia de instalaciones que facilitan el que Honduras –a pesar de su limitado presupuesto– tenga una respetable aviación militar de tipo medio. En

⁵⁵ El Salvador recibe muy poco material a través del DEA. Según los DSAA (1981-95) solo en 1989 compran material por valor –en miles de dólares– de: 143 (vo) 50 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) en el año 2001 adquieren material por más valor: 1.069 (vo) 426 (va). 2002: 15.000 (vo) 6.000 (va); 2003 (0).

⁵⁶ DSAA, 1983.

⁵⁷ DSAA, 1986.

⁵⁸ DSAA, 1990.

⁵⁹ En relación al programa DEA, solo recibe una pequeña ayuda en 1980. Un producto valorado en 20.000 dólares le es entregado a coste cero DSAA (1981-1995).

⁶⁰ La base de la Fuerza Aérea estadounidense Enrique Soto Cano. Construida en 1982 en Comayagua para apoyar la presencia estadounidense en el área compuesta por unos 2.000 militares norteamericanos. Actualmente es uno de los componentes del Comando Sur (JTF-Bravo) y tiene unos 500 estadounidenses destacados.

1981, Honduras recibió para defenderse de la guerra en El Salvador –y de la presión nicaragüense–, vehículos de apoyo, *jeeps*, equipo de construcción de carreteras, helicópteros de apoyo a las tareas de ingeniería, lanchas patrulleras, equipo de comunicación marítimo, lanchas misileras, un avión de caza A-37B, piezas de repuesto de aviación, ocho aviones de entrenamiento TV-2 y helicópteros S-587⁶¹. En 1983 se continúa el proceso armamentista y se recibe apoyo para la aviación, helicópteros, lanchas patrulleras pequeñas, y otro tipo de armas ligeras⁶². En 1986 se apoya la adquisición de aviación ligera, helicópteros de transporte, lanchas patrulleras, vehículos de transporte terrestre, artillería, sistemas de defensa aérea, equipos de comunicación y seguimiento y actualización de otros materiales entregados anteriormente⁶³.

En 1990 el DSAA justifica el apoyo a Honduras por la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas para contrarrestar la amenaza de los sandinistas. Para ello se recomienda sustituir algunos antiguos “super mystere” por cazas F-5, modernizar patrulleras navales y mejorar capacidades logísticas y de mantenimiento. Concluida la guerra, en 1994 se recomienda mantener los niveles de entrenamiento y el uso de la base Soto Cano para la lucha contra el tráfico de drogas. Según el DSAA de 1994 las Fuerzas Armadas de Honduras redefinen sus funciones para centrarse en las operaciones contra narcóticos y de interdicción del tráfico de armas⁶⁴.

Como se ha comentado anteriormente, República Dominicana –junto con Venezuela y Honduras– se constituyó como una de las piezas principales con las que Estados Unidos pretendió neutralizar la amenaza aérea cubana en el Caribe. Esta condición de aliado indiscutible le permitió a República Dominicana gozar de una serie de ayudas tanto de entrenamiento como de adquisiciones. En 1981 los Estados Unidos proveen 8 helicópteros, 70 camiones, 2 lanchas patrulleras y diferentes equipos de apoyo para la aviación. En 1983, 4 aviones de combate A-37 para sustituir los anticuados P-51, dos helicópteros UH-1H para operaciones de búsqueda y rescate, dos patrulleras para tareas de narcotráfico y diferentes camiones de transporte⁶⁵. En 1986 se anuncia la continuidad del

⁶¹ DSAA, 1981.

⁶² DSAA, 1983.

⁶³ DSAA, 1986.

⁶⁴ DSAA (1994:204-206). Honduras es un receptor constante de material DEA, sobre todo en el período de la guerra en Centroamérica. Según DSAA (1981-95), en miles de dólares: 1980: 968 (vo) 300 (va); 1982: 2.203 (vo) 375 (va); 1983: 164 (vo) 43 (va); 1984: 148 (vo) 12 (va); 1993: 162 (vo) 8 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) 1998: 17 (vo) 3 (va); 1999: 814 (vo) 153 (va); 2000: 240 (vo) 96 (va).

⁶⁵ DSAA, 1983.

programa de los A-37, vendiendo a los dominicanos entre 12 y 16 piezas de repuesto para asegurar su mantenimiento. También se adquieren camiones, helicópteros, municiones, partes de repuestos para lanchas patrulleras, equipos de comunicaciones y rifles M-16⁶⁶. Una vez ya finalizada la guerra fría –y reducida la amenaza cubana– la ayuda se destina al combate al narcotráfico, afirmándose incluso en el documento del DSAA de 1994 que los dominicanos han percibido negativamente la reducción de la ayuda, entendiéndolo que los norteamericanos valoran su colaboración en la guerra contra las drogas de una manera muy superficial. Ello lleva al DSAA a solicitar al Congreso que se aumente la ayuda en entrenamiento para las Fuerzas Armadas dominicanas, y los ejercicios de colaboración con los guardacostas de Estados Unidos⁶⁷.

4. ¿NUEVOS ESCENARIOS EN LA ASISTENCIA MILITAR A PARTIR DEL 2001?

La importancia de los ataques terroristas a Washington DC y Nueva York el 2001 inauguró un nuevo período que se inserta sin dificultades en la lógica cambiante de la defensa de los intereses de Estados Unidos. Hacer un diagnóstico de este periodo, sin embargo, resulta una tarea compleja por varias razones. En primer lugar, por las inercias de la administración pública. A pesar de la presión política, esta tarda tiempo en la adaptación a un nuevo contexto. Se enfrentan dificultades que van desde imaginar las acciones necesarias para luchar contra el terrorismo en América Latina hasta la elaboración misma de programas de asistencia que aborden el problema “satisfactoriamente” y que además sean aceptados en la región. En segundo lugar por la dudosa confiabilidad de una información que se publica abierta en un contexto de tensión importante y que es difícil de controlar.

No obstante, la principal consecuencia visible del cambio de política ha sido la intensificación del conflicto en Colombia. De la guerra contra las drogas en ese país se ha pasado a la guerra contra estas y contra el terrorismo, apoyando los planes del presidente Uribe para combatir los grupos insurgentes. En el año 2004 la Casa Blanca pide que se duplique la canti-

⁶⁶ DSAA, 1986.

⁶⁷ En relación al material DEA, en miles de dólares. Según DSAA (1981-1995) 1980: 2 (vo) 2 (va); 1985: 130 (vo) 20 (va); 1987: 201 (vo) 11 (va); 1993: 3.458 (vo) 226 (va). Según Isacson *et al.* (2004b) 1996: 340 (vo) 17 (va); 1997: 1.857 (vo) 91 (va); 1998: 2.659 (vo) 133 (va); 1999: 1.685 (vo) 567 (va); 2002: 2.496 (vo) 838 (va).

dad de tropas estadounidenses en Colombia⁶⁸. Según Haugaard “el Comando Sur de Estados Unidos sube la apuesta “retórica”⁶⁹. Se observa el uso cada vez más imaginativo de la guerra contra el terrorismo por parte del Comando Sur para justificar gastos”. El incremento de asistencia militar centrado sobre todo en Colombia no está destinado a combatir a Al Qaeda u otras redes terroristas internacionales, sino también a aumentar el grado y la intensidad de la intervención en Colombia, y a mantener la intensidad de esta en los otros países que participan de la lucha contra las drogas, especialmente en la región andina y centroamericana⁷⁰.

TABLA 9
Ventas de armamentos y personal militar latinoamericano entrenado por Estados Unidos 2001-2003

	2001 FMS	2001 FMS	2001 FMS	2001 FMS	2001 FMS	2001 FMS
Argentina	26.716	26.716	26.716	26.716	26.716	26.716
Bolivia	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
Brasil	50.141	50.141	50.141	50.141	50.141	50.141
Chile	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
Colombia	229.801	229.801	229.801	229.801	229.801	229.801
R. Dominicana	299	299	299	299	299	299
Ecuador	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
El Salvador	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801
Guatemala	0	0	0	0	0	0
Honduras	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
México	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524
Nicaragua	0	0	0	0	0	0
Paraguay	21	21	21	21	21	21
Perú	837	837	837	837	837	837
Uruguay	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Venezuela	22.209	22.209	22.209	22.209	22.209	22.209

Fuente: Elaboración a partir de datos de Isacson⁷¹. FMS corresponde al programa de ventas militares, IMET al de entrenamiento. Datos en miles de dólares. Número real de entrenados.

⁶⁸ Puede parecer sorprendente, por el reconocimiento tradicional de que América Latina no es una zona prioritaria para Estados Unidos, pero Colombia desde el año 2001 es el país del mundo que ha permitido que más militares reciban formación de Estados Unidos. Irak y Afganistán le siguen en el 2003 con 9.210 militares, y 5.054, respectivamente. Para los años 2002 y 2003 la distancia con los siguientes beneficiarios de Colombia (Tailandia, Egipto y Corea del Sur) es muy grande.

⁶⁹ Haugaard *et al.*, 2004.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Isacson *et al.*, 2004b.

5. CONCLUSIONES

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ya sea por el protagonismo durante los episodios de intervención en el gobierno como por desarrollar tareas de asistencia social, están acostumbradas a ser actores políticos importantes. Dotadas de presupuestos reducidos se encuentran hoy atravesando una importante crisis de identidad, tratando de determinar las “misiones” que justifiquen su existencia y les permitan recabar recursos económicos y apoyo social.

La política estadounidense ha privilegiado –por lo menos desde el inicio de la guerra fría– las relaciones directas entre los militares de Estados Unidos y sus contrapartes. La justificación de esta relación militar-militar ante el Congreso de Estados Unidos ha tenido un carácter paternalista: los militares estadounidenses ayudarían a entender a los latinoamericanos la democracia. Sin embargo, al fomentarse la autonomía militar se ignoró cómo deberían ser las relaciones entre civiles y militares en una democracia.

Como señala La/C⁷² esta relación ha incentivado la autonomía militar en la región –lo que va en contra de la consolidación de la democracia–, alimentado carreras armamentistas, según el interés de los Estados Unidos, y consolidado la influencia de los militares estadounidenses en la región. Paradójicamente, esta influencia ha sido perjudicial para los propios intereses de los norteamericanos, generando rechazo y desconfianzas por parte tanto de los propios militares latinoamericanos como de sus sociedades, por el carácter cambiante e instrumental de sus posiciones.

Los últimos episodios de la guerra fría se enmarcaron en un contexto político complejo que no agradó a los militares estadounidenses y que los enfrentó a los militares de la región. Por una parte la guerra fría no había acabado, y seguían existiendo conflictos “calientes”, por otra –herencia de las políticas de Carter–, el Congreso estadounidense vetaba la asistencia militar a países que habían abusado de los derechos humanos al desarrollar la “doctrina de seguridad nacional” ideada por los mismos militares estadounidenses. Las crisis en ese período se centran en Centroamérica –con Cuba como referente negativo–, la cuenca del Caribe como testigo, y el siempre latente conflicto entre Ecuador y Perú.

⁷² La/C (1999).

La suspensión de la ayuda militar, fundamentalmente a los países del Cono Sur, y a Guatemala por abusos contra los derechos humanos, fue duramente criticada por los militares estadounidenses. El argumento era que si ellos no mantenían relación con los ejércitos “castigados”, otros países lo harían, beneficiándose económicamente al abrir el *mercado* de las armas, y políticamente logrando las simpatías de los latinoamericanos. Con el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias se fue recuperando el permiso para colaborar con militares de estos países, retomándose sobre todo asistencia en materia de entrenamiento. A pesar de ello, la actitud cambiante de la política estadounidense, que se centra en los intereses del momento, ha generado, como se señala en este trabajo, profundos sentimientos de desconfianza desde los militares latinoamericanos.

En relación a las consecuencias que tuvieron para los países de América Latina la asistencia militar estadounidense durante el período final de la guerra fría se puede señalar: (1) En el caso centroamericano, aparte de las duras repercusiones que los conflictos tuvieron para la sociedad civil, la fuerte inversión en asistencia militar no ha tenido muchas consecuencias a medio plazo, principalmente por la rapidez con la que los materiales bélicos se vuelven obsoletos, y la falta de mantenimiento adecuado. (2) En relación a las consecuencias del apoyo a Ecuador en su escalada armamentística con Perú, Estados Unidos tiene parte de responsabilidad tanto en los breves conflictos en los que entraron estos países a finales de los noventa como de la actual posición política de los militares en el país andino. (3) Finalmente, las importantes compras de material que realizó Venezuela —gracias a que tenía el dinero para pagarlas y que se consideraba un fiel aliado— se han vuelto en contra de Estados Unidos y demuestran con claridad dos cuestiones: la primera es que la asistencia militar no evita la “tentación” de que los militares quieran participar en política; la segunda, que el intercambio profesional tampoco logra la “subordinación” de estos a Washington.

Finalizada la guerra fría, nuevamente la administración estadounidense se encuentra con dos problemas que chocan entre sí. Por una parte, para la lucha contra el narcotráfico se ha fomentado la utilización de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, dotándolas de entrenamiento y apoyando sus esfuerzos a través de la tradicional relación militar-militar. Por otra, el fomento de la democracia, a través del fortalecimiento de ministerios de defensa organizados por civiles y de las medidas de transparencia. El primero de esos esfuerzos se ha ido consolidando bajo la mirada de determinados grupos de la sociedad civil y el Congreso de Estados Unidos. El segundo ha sido más lento, y a pesar del apoyo de la comunidad internacio-

nal representada por la OEA y de los mismos gobiernos de los países latinoamericanos, ha encontrado resistencias profesionales que han entorpecido la consolidación de estas medidas⁷³.

La coyuntura que se abre después del 11 de septiembre en América Latina es preocupante. La consolidación de la democracia ya no forma parte de los intereses de Estados Unidos, por lo que los programas de asistencia que tenían relación con este objetivo se transformarán, o darán paso a otros. El terrorismo se convierte en la gran amenaza, y aunque no se tenga claro cómo enfrentarlo –de momento no hay muchos problemas en identificarlo con la lucha contra las drogas–, en la medida en que los programas se vayan adaptando al nuevo reto se intensificarán las tradicionales relaciones militar-militar, siendo posible que se vuelva atrás y se justifique nuevamente la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de carácter interno.

Desde esta perspectiva, la nueva declaración de seguridad de las Américas, aprobada en México, D.F., en octubre del 2003, y el reconocimiento de la “multidimensionalidad” de las amenazas, no harán ningún favor a la democracia, en sociedades donde las instituciones políticas no son fuertes y donde se podrá volver a justificar que ante la falta de presencia del Estado sean las fuerzas militares las que desarrollen toda una serie de funciones.

REFERENCIAS

- Center for International Policy's. 2003. “Colombia Project. U.S. Military and Police Aid: The 2002 aid package” en www.cipoline.org/colombia. Washington, D.C.: Latin America Working Education Fund, Center for International Policy, Washington Office on Latin America.
- Cohen, E. 2002. *Supreme Command, Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime*. New York: The Free Press.
- Defense Security Assistance Agency. 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. *Congressional Presentation for Security Assistance Programs*. Washington, D.C.: Department of Defense.
- Department of Defense. 1967. *Military Assistance Facts*. Washington, D.C.: Department of Defense.

⁷³ Como en el mismo Comando Sur, que no acaba de entender, siguiendo lo que Cohen (2002) llama “teoría normal de las relaciones civiles-militares”, que los políticos tengan algo que decir en el interior de los cuarteles militares.

- Department of Defense. 1990. *Foreign military sales, foreign military construction sales and military assistance facts*. Washington, D.C: Department of Defense.
- Department of Defense. 2000. *Foreign military sales, foreign military construction sales and military assistance facts*. Washington, D.C: Deputy for financial management comptroller, DSCA.
- Department of State. 2002. *U.S. security assistance to the Andean Region, 2000-2001*. Washington, DC: Department of State.
- Diamint, R. 2001. *Democracia y Seguridad en América Latina*. Buenos Aires: Nuevohacer/ Universidad Torcuato Di Tella.
- Haugaard, L. et al. 2004. *La sombra de septiembre. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina después del 11 de septiembre*. Washington, D.C.: Latin America Working Education Fund, Center for International Policy, Washington Office on Latin America.
- Isacson, A. et al. 2004a. *Blurring the lines. Trend in U.S. military programs with Latin America*. Washington, D.C.: Latin America Working Education Fund, Center for International Policy, Washington Office on Latin America.
- _____ et al. 2004b. "Just the facts" en www.cipoline.org/facts. Washington, D.C.: Latin America Working Education Fund, Center for International Policy, Washington Office on Latin America.
- Grimmett, R. 2002. *Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1994-2001*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
- LA/C. 1999. *Still Pulling Strings*, Philadelphia: Latin American/Caribbean Peacebuilding Program.
- Lefever, E. 1976. "The military assistance training program" en *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science.

Carlos Barrachina Lisón

barrachinac@correo.uqroo.mx

Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Quintana Roo (México) desde abril de 2004. Asimismo es cofundador de la ONG "Instituto de Estudios y Políticas Públicas" (IEEPP) en Nicaragua. Entre el año 2000 y hasta su incorporación a esta universidad trabajó como Profesor Asociado de Investigación en el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University (E.E.UU.).